

Encrucijada económica

●Chile enfrenta hoy una encrucijada económica que se siente con especial rigor en las calles empinadas de Valparaíso, donde el alza sostenida del precio de los combustibles ha dejado de ser una cifra macroeconómica para transformarse en un obstáculo cotidiano que asfixia el presupuesto familiar.

A nivel fiscal, el panorama es complejo; el Estado se ve forzado a un delicado equilibrio entre la recaudación del impuesto específico y la constante inyección de recursos al Mepco para contener una volatilidad alimentada por el valor del dólar y el crudo internacional. Sin embargo, el valor del incremento ha alcanzado niveles que superan cualquier capacidad de absorción ciudadana, traduciéndose en un “impuesto invisible” que golpea con saña a la clase media.

Para este segmento, el automóvil no es un lujo, sino una herramienta de trabajo y el pilar de su logística diaria; cada peso extra en el surtidor es un peso menos para educación, salud o alimentación básica. En nuestra región, las consecuencias son alarmantes: desde el encarecimiento de los fletes que eleva el precio del pan en el almacén del cerro, hasta la presión insostenible sobre los gremios de colectivos y microbuses que sostienen la conectividad del Puerto.

No podemos seguir dependiendo de soluciones de parche; se requieren medidas preventivas audaces, como una revisión profunda de la estructura tributaria de los combustibles en perio-

dos de crisis y un impulso real a la electromovilidad y al transporte ferroviario de carga.

Valparaíso no puede permitirse quedar detenido por la inercia de una política que no lee la urgencia de sus vecinos. Es momento de actuar con decisión, antes de que el motor de nuestra clase media se apague definitivamente por falta de aire y recursos.

Alexis Oliveros Aguilar

Responsabilidad fiscal

●A propósito del alza del precio de las bencinas, es importante señalar que no existe un mecanismo capaz de moderar dichos aumentos cuando no hay recursos disponibles en las arcas fiscales. En escenarios de crisis, un gobierno de distinto signo político probablemente optaría por endeudarse -ya sea mediante préstamos a altas tasas de interés o la emisión de bonos-, lo que, en definitiva, implica incrementar la deuda pública.

Nos encontramos frente a una sociedad que, por un lado, manifiesta legítimas inquietudes ante el encarecimiento del costo de la vida, pero que, por otro, ha sido progresivamente permeada por una noción errónea de recursos públicos ilimitados y una preocupante laxitud frente a la responsabilidad fiscal.

No son pocos los casos de resistencia al cumplimiento de obligaciones tributarias o incluso de fraude al Estado, como ha quedado de manifiesto recientemente en el debate sobre el acceso indebido a la gratuidad en la educación.